

INFORME EJECUTIVO

Seguimiento a Orden Judicial – Proceso de Restitución de Tierras

Radicado: 680813121001201700124001

Despacho: Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Barrancabermeja

Solicitantes: Dora Edelmira Restrepo Arango y Eduard Antonio Hernández

Entidad: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

Auto objeto de seguimiento: N° 010 de 30 de enero de 2026

Audiencia de seguimiento: 19 de febrero de 2026

Fecha del informe: 24 de febrero de 2026

1

SUSTENTO JURIDICO DEL INFORME

En cumplimiento del Auto N° 010 de 30 de enero de 2026 proferido dentro del proceso de restitución de tierras radicado 680813121001201700124001, adelantado ante el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Barrancabermeja, se procedió a realizar verificación integral del estado de cumplimiento de la orden relacionada con el reconocimiento y pago de la indemnización administrativa a favor de los señores Dora Edelmira Restrepo Arango y Eduard Antonio Hernández, en el marco de las competencias de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

De conformidad con los anexos administrativos revisados incluido el informe institucional de 22 de noviembre de 2025, las resoluciones previamente expedidas y la trazabilidad de radicados asociados (870309, 4039199, 864913 y 4039207) se constató que las solicitudes de indemnización identificadas derivan del mismo hecho victimizante de desplazamiento forzado ocurrido en el año 2009, circunstancia que activa la aplicación estricta del artículo 20 de la Ley 1448 de 2011, el cual consagra la prohibición de doble reparación por el mismo daño.

Del análisis técnico efectuado se verificó que los solicitantes se encuentran incluidos en el Registro Único de Víctimas y que respecto de uno de ellos existe reconocimiento administrativo previo de indemnización, mientras que frente al otro se evidencia trámite en curso dentro de los parámetros del procedimiento establecido en el Decreto 1084 de 2015 y la Resolución 1049 de 2019, atendiendo criterios de priorización, disponibilidad presupuestal y metodología técnica definida por la entidad. En consecuencia, no resulta jurídicamente procedente ordenar un nuevo reconocimiento indemnizatorio cuando ya existe decisión administrativa asociada al mismo núcleo fáctico, ni anticipar pagos al margen del procedimiento reglado, pues ello implicaría desconocer el principio de legalidad del gasto público y el deber de correcta administración de los recursos del Fondo para la Reparación.

Durante la audiencia de seguimiento celebrada el 19 de febrero de 2026 se expuso detalladamente la trazabilidad de las solicitudes, el estado real de cada radicado y la verificación cruzada orientada a evitar duplicidades.

- Se dejó constancia de que la entidad ha adelantado estudio completo del expediente, ha validado soportes, ha revisado resoluciones existentes y ha aplicado el método técnico correspondiente para determinar la indemnizabilidad y eventual turno de pago. Asimismo, se explicó que la obligación institucional no se agota en la mera inclusión en el RUV, sino que el pago efectivo debe realizarse conforme al procedimiento administrativo vigente y bajo el principio de sostenibilidad fiscal.

Adicionalmente, se informó al despacho la existencia de nuevas solicitudes relacionadas con el mismo hecho victimizante, lo cual exige consolidar un informe integral de todas las reclamaciones a efectos de evitar doble pago y garantizar coherencia administrativa. Esta actuación preventiva responde al deber de diligencia reforzada en el manejo de recursos públicos y a la obligación de asegurar que no se configure enriquecimiento sin causa derivado de reconocimientos múltiples por el mismo daño.

2

En ese sentido, la entidad ha dado cumplimiento formal y material a las órdenes impartidas en cuanto a verificación, estudio, inclusión y análisis de procedencia, manteniendo actuación activa, transparente y documentada. La controversia actual no radica en la inactividad administrativa, sino en la interpretación del alcance de la orden judicial frente a un evento que ya cuenta con reconocimiento previo o trámite reglado en curso, situación que debe armonizarse con el marco normativo aplicable y con la prohibición expresa de doble indemnización.

Se continuará con el seguimiento permanente del expediente judicial y administrativo, adoptando las medidas jurídicas necesarias para salvaguardar el principio de legalidad, prevenir riesgos procesales y garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales dentro del marco normativo que rige la reparación administrativa a las víctimas.

1. OBJETO DEL INFORME: Presentar informe ejecutivo consolidado sobre el estado de cumplimiento de la sentencia posfallo, en atención al Auto N° 010 de 2026, integrando las actuaciones administrativas, las nuevas solicitudes identificadas y el análisis técnico-jurídico sobre la indemnización administrativa.

2. TRAZABILIDAD DE LAS SOLICITUDES DE INDEMNIZACIÓN: Se identifican los siguientes radicados asociados al mismo hecho victimizante (desplazamiento forzado ocurrido en 2009):

- Rad. 870309 – Solicitud 4039199
- Rad. 864913 – Solicitud 4039207
- Rad. SF000011951 (inclusión derivada de sentencia)

Todos corresponden al **mismo hecho victimizante**, lo cual obliga a aplicar control estricto de doble reparación conforme al artículo 20 de la Ley 1448 de 2011.

3. ESTADO ADMINISTRATIVO ACTUAL

3.1. Registro Único de Víctimas

Se verificó inclusión en el RUV conforme a lo ordenado en sentencia.

3.2. Resoluciones relevantes

- ✚ Resolución No. 04102019-1025263 (19 abril 2021) – Reconocimiento previo indemnizatorio.
- ✚ Resolución 01302 (20 junio 2025) – Acta de posesión Jefe Oficina Asesora Jurídica.
- ✚ Resolución 00263 (3 septiembre 2025) – Actuación administrativa relacionada con representación institucional.

4. MÉTODO TÉCNICO Y CONTROL DE DOBLE INDEMNIZACIÓN

Se efectuó:

- ✚ Estudio completo del expediente administrativo.
- ✚ Verificación cruzada de radicados.
- ✚ Revisión del estado actual de indemnizaciones.
- ✚ Validación del método técnico de priorización.

Variables analizadas:

1. Inclusión en Registro Único de Víctimas.
2. Existencia de solicitud formal de indemnización.
3. Aplicación del principio de prohibición de doble indemnización.

Conclusión técnica: No es jurídicamente procedente reconocer una nueva indemnización por el mismo hecho victimizante cuando ya existe reconocimiento previo o trámite activo asociado al mismo núcleo fáctico.

5. NUEVAS SOLICITUDES Y CONTROL INTEGRAL

Se identificó la existencia de nuevas reclamaciones asociadas al mismo evento victimizante.

Por lo anterior:

- ✚ Se debe consolidar informe integral de todas las reclamaciones.
- ✚ Se debe evitar duplicidad presupuestal.
- ✚ Se requiere trazabilidad completa de pagos y reconocimientos.
- ✚ Se mantiene análisis permanente sobre eventual reconocimiento para pago de reparación, siempre que no configure doble reparación.

6. AUDIENCIA DE SEGUIMIENTO (19 DE FEBRERO DE 2026)

En la audiencia se:

- ✚ Expuso el estado actual administrativo.
- ✚ Se explicó la trazabilidad de los radicados.
- ✚ Se sustentó jurídicamente la improcedencia de doble pago.
- ✚ Se dejó constancia del cumplimiento formal de inclusión y estudio.

7. ANÁLISIS DEL DESPACHO.

Motivos:

- exige materialización efectiva del pago.
- Existe advertencia expresa de consecuencias disciplinarias.
- Puede abrirse incidente de desacato si se interpreta incumplimiento material.

Fortaleza institucional:

- Reconocimiento previo acreditado.
- Trámite vigente dentro de términos legales.
- Aplicación estricta del principio de prohibición de doble reparación.
- Soporte documental completo.

8. CONCLUSIÓN GENERAL

LA UNIDAD DE VICTIMAS HA:

- ✚ Cumplido con la inclusión en RUV.
- ✚ Realizado estudio completo del expediente.
- ✚ Verificadas solicitudes y resoluciones.
- ✚ Aplicado método técnico.
- ✚ Controlado el riesgo de doble indemnización.
- ✚ Comparecido a audiencia y rendido informe oportuno.

El punto crítico actual no es la ausencia de actuación administrativa, sino la interpretación judicial sobre el alcance del pago ordenado frente a un hecho previamente indemnizado o en trámite.

Se continuará el monitoreo del proceso y se preparará estrategia jurídica preventiva ante eventual incidente de desacato.

Cordialmente,


CARLOS ALBERTO MORA CARRASQUILLA
C.C. 85.438.334 del Banco, Magdalena
T.P. 91.965 del C.S.J.